



Foro Penal

REPORTE SOBRE LA REPRESIÓN EN VENEZUELA

JULIO 2020



foropenal.com



@ForoPenal



@ForoPenal



Foro Penal

Av. Luis Roche, Edif. Bronce, piso 2,
Oficina 2. Altamira, Caracas, Edo.
Miranda.

República Bolivariana de Venezuela
+582122638586 / +584142694287

www.foropenal.com

info@foropenal.com

[@ForoPenal](https://www.instagram.com/ForoPenal)



Este reporte fue elaborado y coordinado por Alfredo Romero y Gonzalo Himiob Santomé, con la colaboración de Mariela Suárez, Patricia Velázquez y con base en la información suministrada por los coordinadores regionales del Foro Penal y abogados miembros de la organización.

El Foro Penal es una ONG que ha trabajado en la defensa de los derechos humanos desde 2002, asistiendo de manera gratuita a las víctimas de la represión del Estado, incluyendo detenciones arbitrarias, violaciones graves a los DDHH, tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes.

El Foro Penal cuenta al día de hoy con aproximadamente 200 abogados voluntarios y más de dos mil activistas en toda Venezuela que se ocupan de prestar asistencia y apoyo legal a las víctimas. El Foro Penal ha sido galardonada con diversos premios de derechos humanos nacionales e internacionales en virtud de su labor en la defensa de derechos humanos.

JULIO
2020

RESUMEN EJECUTIVO

Entre el 1° de enero y el 31 de julio de 2020 han sido detenidas con fines políticos 281 personas. Particularmente esta cifra ha venido aumentando cuantitativamente a partir de marzo, luego que se decretara el estado de alarma en Venezuela, debido a la pandemia de COVID-19.

Se han intensificado las protestas por fallas en los servicios básicos, tales como agua o electricidad, las cuales han sido reprimidas por los cuerpos de seguridad, quienes, amparándose en el referido decreto de estado de alarma, han arrestado o “retenido”¹ a un número importante de ciudadanos. Otras de las causas de los arrestos durante el período de estado de alarma incluyen: arrestos durante protestas por escasez de combustible, arrestos por publicaciones de mensajes relacionados con la pandemia o en contra del Gobierno de Nicolás Maduro o sus funcionarios.

Específicamente en julio hubo 39 personas detenidas con motivos políticos. Al menos el 97% de estos arrestos fueron realizados por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Desde que se decretara el estado de alarma, a la fecha 31 de julio, continúan los obstáculos en el acceso a la justicia y las restricciones e incomunicación entre los abogados y los detenidos, por lo que únicamente se ha podido tener información extraoficial sobre estas personas. Los tribunales y las oficinas del Ministerio Público de todo el país permanecen sin actividades, solo estarían habilitados para actuar por guardias, para casos considerados por ellos como excepcionales o de “emergencia”.² Las audiencias regulares se mantienen suspendidas o se están realizando a puerta cerrada, de espaldas a la defensa técnica, que se sustituye arbitrariamente por defensa pública.

En cuanto a los presos políticos la cifra al cierre del mes de julio de 2020 es de 382 personas, entre ellas 29 mujeres, 126 funcionarios militares y 2 adolescentes.

El 15 de julio de 2020 fue presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización Naciones Unidas (ONU) por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) Michelle Bachelet, un informe, específico sobre la indepen-

1 Práctica que implica la privación de la libertad “informal” de ciudadanos, sin motivo jurídico, sin notificar al Ministerio Público ni a los Tribunales, por espacios breves de tiempo en los que a las personas retenidas no se les permite contacto con familiares o abogados.

2 No existe un criterio objetivo o unificado que permita determinar cuándo un caso es excepcional o de emergencia, lo que abre la puerta a la arbitrariedad judicial.

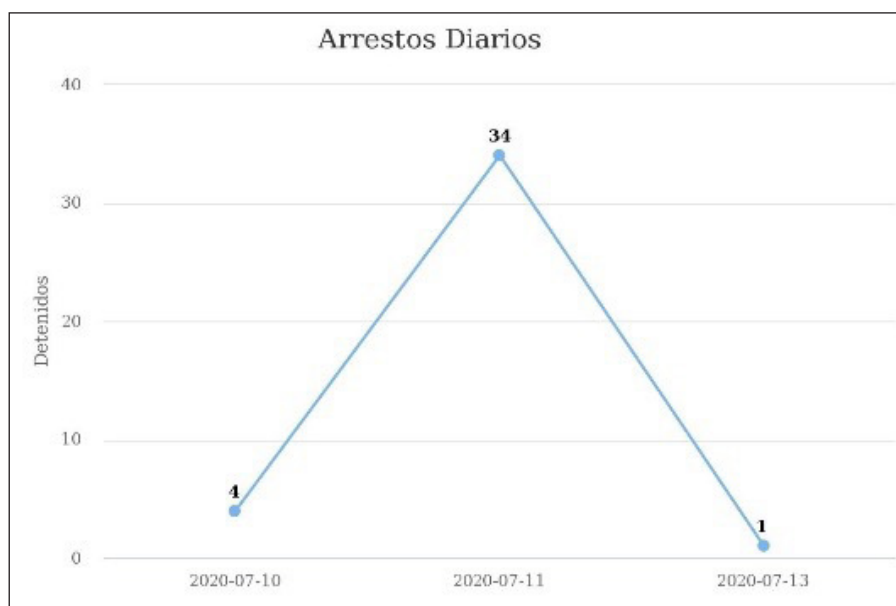
dencia del sistema de justicia y el acceso a la justicia, las violaciones de los derechos económicos y sociales, en Venezuela, y la situación de los derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco.³

DETENCIONES CON FINES POLÍTICOS

El Foro Penal verificó que 281 personas fueron detenidas con fines políticos en Venezuela, durante el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de julio de 2020, de las cuales se identificaron 51 mujeres y 230 hombres.

De la cifra total anterior de personas detenidas con fines políticos entre enero y julio, al cierre de este reporte, permanecen tras las rejas 123 personas, de las cuales: 109 fueron privadas formalmente de libertad, 13 personas se encuentran privadas de libertad sin judicializar y 1 persona se encuentra en desaparición forzada.

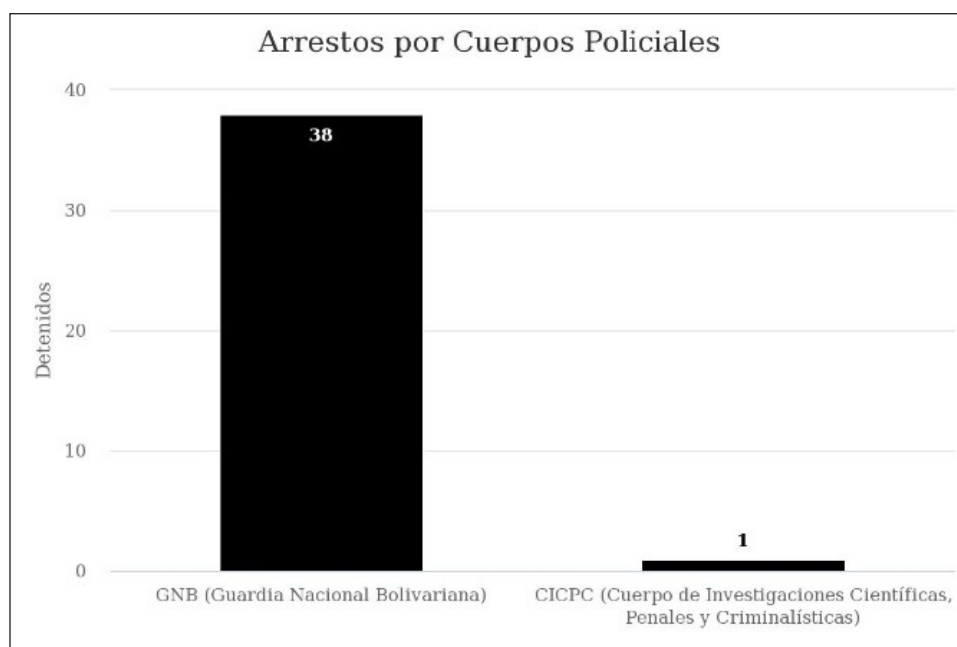
Por lo que respecta concretamente a julio, se registraron 39 nuevas detenciones con fines políticos en el país. Los días en los que ocurrieron estas detenciones fueron: el 10 de julio, en el que fueron verificadas 4 personas arrestadas, debido a protestas de los habitantes del sector conocido como “Río Tocuyo” ubicado en el municipio Torres del estado Lara, por fallas en la prestación de servicios básicos (agua y electricidad); el 11 de julio fueron arrestadas 34 personas en el mismo sector del estado Lara, por protestas en fallas de los servicios básicos; y, el 13 de julio, se verificó 1 persona arrestada, por presuntas publicaciones en redes sociales con contenido en contra de funcionarios del Gobierno. A continuación, un gráfico que contiene la cantidad de detenciones de julio y los días en las que ocurrieron:



Arrestos diarios durante julio de 2020

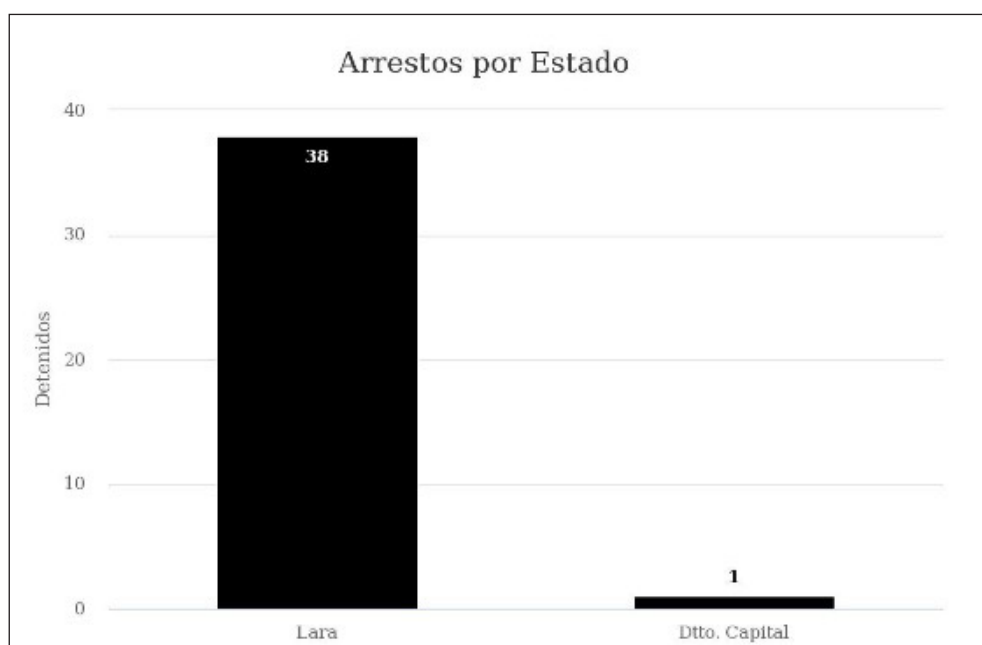
3 Ver: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session44/Documents/A_HRC_44_54_UnofficialSpanishTranslation.pdf

Las detenciones con fines políticos de julio fueron ejecutadas por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB): 38 arrestos y por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC): 1 arresto, tal y como puede observarse seguidamente:



Arrestos por cuerpo de seguridad durante julio de 2020

El estado Lara y el Distrito Capital fueron las zonas de Venezuela en las que se reportaron las detenciones del mes. De seguidas, pueden verse con detalle los arrestos por estados del país:



Arrestos por estado del país durante julio de 2020

Las cifras acumuladas, en el período comprendido entre enero de 2014 y el 31 de julio de 2020, arrojan lo siguiente:

Detenciones con fines políticos	15.543
Personas que permanecen sometidas a medidas cautelares	9.221
Ciudadanos civiles procesados ante la jurisdicción penal militar	870

ESTADO DE ALARMA PRODUCTO DE LA PANDEMIA COVID-19

En julio de 2020, el estado de alarma en el país fue prorrogado por cuarta oportunidad, nuevamente por un período de 30 días más, mediante el Decreto N° 4.247, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.554 de fecha 10 de julio de 2020 ⁴. Las prórrogas anteriores del estado de alarma producto de la pandemia COVID-19 fueron: por tercera vez, con el Decreto N° 4.230, el cual fue publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N°6.542 del 11 de junio de 2020⁵. La segunda, se hizo mediante el Decreto N° 4.198, de fecha 12 de mayo de 2020 ⁶, la primera prórroga fue el 12 de abril de 2020, a través del Decreto N° 4.186⁷ y, el decreto inicial de estado de alarma por la pandemia de COVID-19, fue dictado por Nicolás Maduro el 13 de marzo de 2020, a través del Decreto N° 4.160.⁸

En cuanto a las detenciones con fines políticos durante el periodo de cuarentena, el Foro Penal ha venido reportando una escalada, en lo que se refiere a las cifras de personas arrestadas a partir del 8 de marzo de 2020, fecha en la cual se tuvo información oficial de los primeros casos de COVID-19 en el país⁹. Para apreciar este incremento en el número de detenciones, basta con observar lo siguiente:

- Entre el 1° de enero y el 7 de marzo de 2020, hubo un total de 24 personas arrestadas con motivos políticos, en un período de 36 días aproximadamente.
- Entre el 8 de marzo (fecha en la cual se dieron a conocer por parte de voceros oficiales los primeros casos de COVID-19 en Venezuela) y el 13 de marzo (fecha en la que se decretó el estado de alarma) hubo un total 20 personas arrestadas en un lapso de 5 días.

4 Ver: <https://www.finanzasdigital.com/2020/07/gaceta-oficial-extraordinaria-n-6-554-se-prorroga-por-30-dias-el-estado-de-alarma-nacional-para-atender-la-emergencia-sanitaria-del-covid-19/>

5 Ver: <https://www.finanzasdigital.com/2020/06/gaceta-oficial-extraordinaria-n-6-542-se-prorroga-por-30-dias-el-estado-de-alarma-nacional-para-atender-la-emergencia-sanitaria-del-covid-19/>

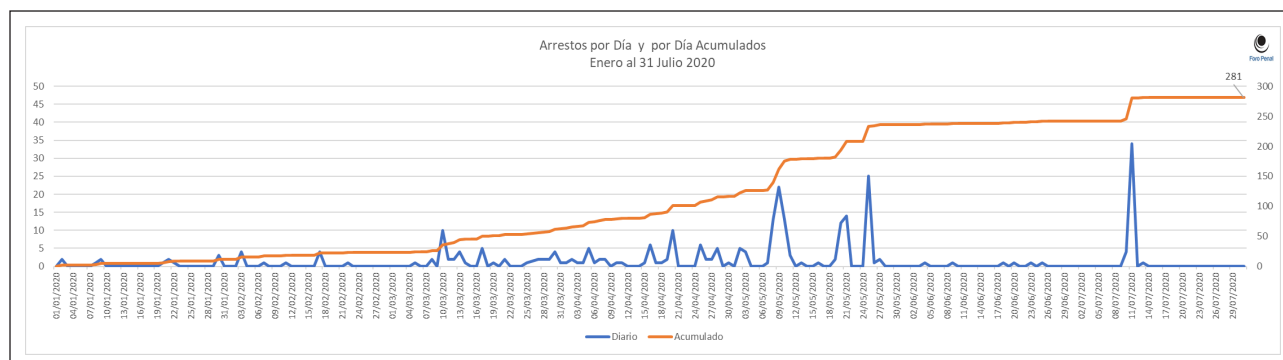
6 Ver: https://es.scribd.com/document/461429132/GACETA-DECRETO-ESTADO-DE-ALARMA-12-05-2020-GOE-6535-1-pdf#from_embed

7 Ver: <https://www.finanzasdigital.com/2020/04/gaceta-oficial-extraordinaria-n-6-528-decreto-mediante-el-cual-se-prorroga-por-30-dias-el-estado-de-excepcion-de-alarma-en-todo-el-territorio-nacional/>

8 Ver: <https://www.finanzasdigital.com/2020/03/gaceta-oficial-extraordinaria-n6-519-se-decreta-el-estado-de-alarma-en-todo-el-territorio-nacional-por-epidemia-del-coronavirus-covid-19/>

9 Ver: BBC: Coronavirus en Venezuela: cuán preparado está el país para enfrentar la pandemia después de confirmar sus dos primeros casos. 13 de marzo de 2020. Ver: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51876226>

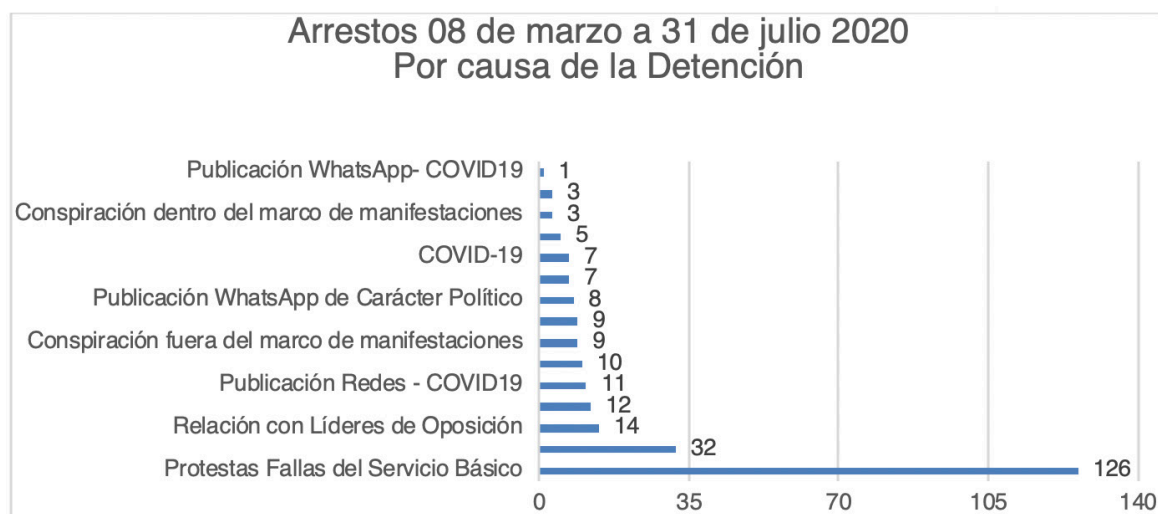
A continuación, se muestra un gráfico que expresa las detenciones diarias y diarias acumuladas, entre enero de 2020 y el 31 de julio de 2020 y, en él puede notarse, el incremento de estas detenciones, a partir del 8 de marzo de este año:



Arrestos diarios-acumulados entre enero y julio de 2020

Lo antes señalado reitera que, el decreto de estado de alarma ha venido siendo aplicado por los funcionarios de los cuerpos de seguridad a discreción, como un nuevo mecanismo de represión sistemática y de control, en contra de la ciudadanía.

Resalta que, al menos el 49% de las detenciones practicadas durante la cuarentena por la pandemia de COVID-19 ocurrieron durante el contexto de protestas por fallas en la prestación de los servicios básicos, principalmente debido a protestas por fallas y racionamiento del servicio eléctrico y racionamiento del servicio de agua potable, también se reportaron detenciones durante protestas debido a la escasez de combustible para vehículos. El resto de las detenciones ocurridas durante el período del estado de alarma, estarían relacionadas principalmente con detenciones de ciudadanos durante manifestaciones, como ocurrió el 25 de mayo, cuando fue detenido un número importante de ciudadanos que exigían la reapertura del denominado “Mercado de Las Pulgas” en Maracaibo, estado Zulia, el cual fue cerrado por las autoridades, debido a un presunto brote de COVID-19. También se produjeron detenciones de personas relacionados directa o indirectamente, con líderes de la oposición; detenciones por publicaciones en redes sociales, en contra de Nicolás Maduro o de sus funcionarios; detenciones por denunciar casos de COVID-19 o alguna situación relacionada con la pandemia en Venezuela en redes sociales; y detenciones de funcionarios militares y/o familiares, relacionados con presuntos alzamientos militares, entre otras. Seguidamente puede verse un gráfico que detalla el número de personas arrestadas con motivos políticos, durante el período de estado de alarma y la causa de detención:



Arrestos por causa de detención entre el 8/03/2020 y el 31/07/2020

También, el Foro Penal ha reportado desde que se decretara el estado de alarma en Venezuela, las restricciones y dificultades que han tenido los abogados en cuanto al acceso al sistema de justicia y a los centros de reclusión del país, por lo cual se hace casi imposible ejercer el derecho constitucional a la defensa de sus defendidos. Debido a la incomunicación a la que son sometidas las personas detenidas, tampoco se informa a los familiares sobre el estado de salud o las condiciones de estas personas. En cuanto a esta situación, particularmente, la Alta Comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) Michelle Bachelet, se pronunció en su informe sobre Venezuela, publicado el 15 de julio, resaltando que:

“El ACNUDH recibió información sobre obstáculos adicionales en el acceso a la justicia desde la declaración del “estado de alarma” el 13 de marzo debido al COVID-19. Abogados y ONG que brindan a apoyo a víctimas reportaron que el sistema de justicia no había establecido mecanismos eficaces para procesar acciones urgentes. También reportaron el incremento de las restricciones en el acceso y la comunicación entre abogados y sus defendidos¹⁰.” (Subrayado nuestro).

ALGUNOS CASOS DE DETENCIONES CON FINES POLÍTICOS DURANTE EL ESTADO DE ALARMA

- El caso de **Nicmer Nicolás Evans**, de 45 años de edad, politólogo, director del medio digital “Punto de Corte” y dirigente de la organización “Movimiento Democracia e Inclusión” quien fue detenido por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). Tras haber sido allanada su vivienda y haber reteni-

10 Ver: Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session44/Documents/A_HRC_44_54_UnofficialSpanishTranslation.pdf

do temporalmente a miembros de su familia durante dicho allanamiento, mientras él no se encontraba dentro de la misma. Horas más tarde, el mismo día del allanamiento, el 13 de julio, Nicmer Evans fue localizado por los funcionarios del CICPC y detenido. El motivo de su detención presuntamente estaría vinculado a una opinión que emitiera en redes sociales, sobre anuncios de contagios por COVID-19 de funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. Fue mantenido desaparecido forzosamente, hasta que lo presentaron el 17 de julio, ante el Tribunal 21 de Control del Área Metropolitana de Caracas. Le fue imputado el presunto delito de “Instigación al odio” con el agravante por motivos de odio e intolerancia. Le fue dictada por el tribunal que lleva la causa medida preventiva privativa de libertad, ordenándosele como centro de reclusión la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) ubicada en la urbanización Boleíta de Caracas.



Nicmer Nicolás Evans

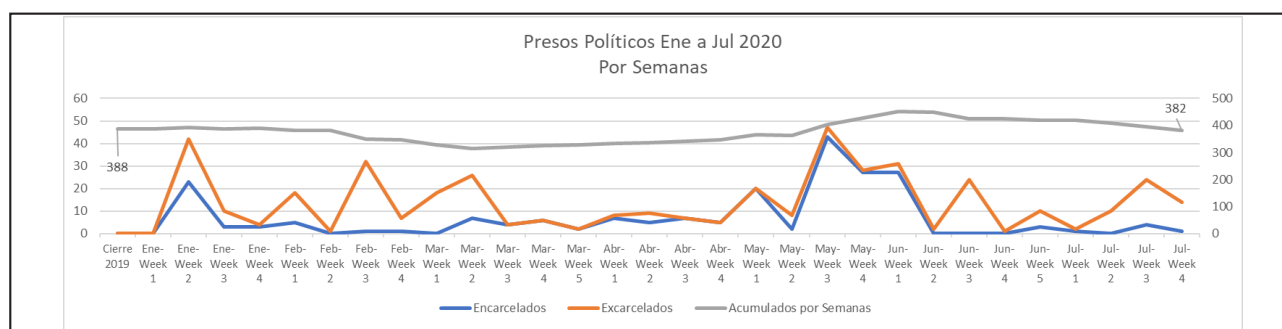
- La detención de al menos 38 personas, habitantes del sector conocido como “Río Tocuyo” ubicado en el municipio Torres del estado Lara, entre los días 10 y 11 de julio, debido a protestas ocurridas los días 7 y 8 de julio, por fallas en la prestación de servicios básicos (agua y electricidad). Estas personas habrían sido detenidas por funcionarios del Grupo de Acciones Especiales de la GNB (GAES). Producto de estas protestas, presuntamente, un vehículo perteneciente a la Guardia Nacional habría sido incendiado y se habrían causado daños a la sede del partido de Gobierno “Partido Unido Socialista de Venezuela” (PSUV). Entre los detenidos se encuentran **Roberto Antonio Suárez** (quien no participó en las protestas), **José Ignacio García** y **Edgardo Yonel Parra**, quienes fueron presentados el 13 de julio, ante el Tribunal Militar Séptimo del estado Lara, imputándoseles los presuntos delitos de: Ultraje al Centinela y Destrucción de bienes propiedad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Fueron privados de libertad por el referido tribunal militar, ordenándoseles como centro de reclusión la sede del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro de la GNB (CONAS) ubicada en el estado Lara. Estos ciudadanos civiles fueron juzgados imputándoseles delitos de naturaleza militar, ante la jurisdicción penal militar, violándoseles de esta manera su derecho al juez natural, establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

PRESOS POLÍTICOS

Al 31 de julio de 2020 existen en Venezuela 382 personas catalogadas como presos políticos¹¹. Entre estas personas se encuentran 126 funcionarios militares, 29 mujeres y 2 adolescentes, tal y como se detalla en el siguiente cuadro:

Presos Políticos al 31/07/2020		Total: 382
Ocupación		
Militares		126
Civiles		256
Género		
Mujeres		29
Hombres		363
Edad		
Adolescentes		2
Adultos		380

El gráfico que sigue muestra las cifras promedio de presos políticos, por semana (entre enero y julio de 2020) así como también evidencia el incremento semanal del promedio de presos políticos a partir de marzo, mes en el cual fue decretada la cuarentena en el país:



Promedio de presos políticos por semana (enero/julio 2020)

11A los efectos prácticos, la noción de “preso político” se maneja desde nuestra ONG en su sentido amplio, abarcando tanto a las personas sometidas a arresto domiciliario como a los ya condenados, aceptando las distinciones recogidas en el aparte “Uso de los Términos” (literales “b” y “c”) del Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión de la ONU (Resolución 43/173, del 9 de diciembre de 1988). La persona arrestada, incluso por motivos políticos, no es considerada por nuestra ONG como un detenido o preso político sino hasta que: 1) Surja una decisión formal de la autoridad judicial que ordene injustamente su privación preventiva de la libertad; o 2) se venza el plazo máximo legal y constitucional (de 48 horas contadas a partir de su arresto) sin que se le libere o sin ser presentado ante la autoridad judicial competente.

OBSERVACIONES FINALES

El estado de alarma decretado en Venezuela desde el 13 de marzo y sus respectivas prórrogas debido a la pandemia de COVID-19, está siendo utilizado por los funcionarios del Gobierno como un nuevo mecanismo de control de la ciudadanía.

Las fallas y la escasez en los servicios básicos y escasez de combustible han sido los principales detonantes para originar protestas en diversos estados del país, durante los últimos meses durante la cuarentena. Estas protestas han sido reprimidas por los funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado, dejando un número importante de personas arrestadas por esta razón. También se observó una cifra significativa de detenciones por motivos políticos, en los cuales se han utilizado para juzgar a los detenidos figuras jurídicas contempladas en la cuestionada “Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia.”

En nuestra opinión la represión podría, eventualmente, seguir escalando en los próximos meses. El Estado podría seguir amparándose para ello, en futuras prórrogas al estado de alarma, como patrón sistemático de represión y control por para perseguir ciudadanos con fines políticos.



Foro Penal

Foro Penal

Alfredo Romero – Director Presidente
Gonzalo Himiob Santomé – Director Vicepresidente
Robiro Terán – Director
Mariela Suárez – Coordinadora Operativa Nacional
Blanca Angarita – Coordinadora Estado Aragua
Luis Armando Betancourt – Coordinador Estado Carabobo
Laura Valbuena – Coordinadora Estado Zulia
Patricia Borges – Coordinadora Estado Bolívar
Raquel Sánchez – Coordinadora Estado Táchira
José Armando Sosa – Coordinador Estado Monagas
Lucía Quintero – Coordinadora Estado Barinas
José Reyes – Coordinador Estado Falcón
Abraham Cantillo – Coordinador Estado Lara
Fernando Cermeño – Coordinador Estado Mérida
Alberto Iturbe – Coordinador Estado Miranda (Altos Mirandinos)
Arelys Ayala – Coordinadora Estado Anzoátegui
Olnar Ortiz – Coordinador Estado Amazonas y Pueblos Indígenas
Néstor Gutiérrez – Coordinador Estado Cojedes
Pedro Arévalo – Coordinador Estado Nueva Esparta
José Torres Leal – Coordinador Estado Portuguesa
Daniel Salazar – Coordinador Estado Sucre
Gabriel Gallo – Coordinador Estado Yaracuy
Wieczs Santos – Coordinadora Estado Apure
Julio Henríquez – Coordinador jurídico internacional